



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Excmo. Tribunal:

Carlos Arturo Altuve, Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa Nº 61.742 caratulada: “**H., B. L., s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP) interpuesto por Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Secretaria de Niñez y Adolescencia de la Pcia. de Bs. As.**”, a V.E. respetuosamente digo:

I.- Que por el presente me notifico del auto de fs. 38 y de conformidad con el trámite correspondiente me expido sobre la admisibilidad y procedencia de la queja interpuesta.-

II.- El Sr. Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Secretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Martín Corrales, con el patrocinio letrado del Secretario Letrado del Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, doctor Martín Jorge Lasarte, interpuso Recurso de Queja contra la resolución dictada por la Excm. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul que rechazó el Recurso de Casación oportunamente articulado por el recurrente contra un anterior decisorio del mismo órgano que no hizo lugar al recurso de apelación presentado y decidió mantener el criterio adoptado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental de supeditar cualquier realojamiento del género a la implementación del Programa de Jóvenes Adultos en el Complejo Penitenciario Centro.-

III.- Entiendo, en consonancia con lo resuelto por la Excm. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul que la enumeración taxativa que realiza el artículo 450 del

Código Procesal Penal tornaría inadmisibile el remedio impugnativo interpuesto por el Sr. Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, no obstante y excepcionalmente, considero necesaria la intervención de ese Excmo. Tribunal de Casación Penal en supuestos en los que, como el presente, surge manifiesta la importancia institucional de la cuestión a debatirse, cual es la ejecución de las sanciones dispuestas en procesos iniciados bajo el régimen legal de la Ley 13.634 -delito cometido cuando el encausado al momento del hecho resulta menor de 18 años de edad- y la observancia estricta de las disposiciones aplicables en materia penal juvenil, que resultan de orden público y se encuentran sustentadas por el principio del interés superior del niño (art. 1, 2, 3, 4 Ley 26.061), especialmente la interpretación y aplicación de las normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3.1 y 40.1).-

IV.- El impugnante se agravia de lo resuelto por Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul en cuanto supedita el realojamiento de **H., B. L.**, quien ha alcanzado la mayoría de edad y se encuentra alojado en un establecimiento dependiente de la Secretaría destinado a jóvenes menores de edad, hasta tanto se incluya en algunas de las unidades del Servicio Penitenciario del Complejo Centro (Sierra Chica, Azul, Barker, Alvear) un área para jóvenes adultos de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 12.256, ello fundado en considerar contraproducente su traslado a Unidades Penitenciarias lejanas al domicilio del joven adulto que nos ocupa y en aras de una efectiva reeducación del mismo.-

Sostiene el Sr. Subsecretario que el órgano jurisdiccional al resolver en tal sentido ha excedido el límite de su competencia.-

Alega, asimismo, que el realojamiento propiciado no vulnera el derecho de acercamiento familiar y social del joven pues tanto la



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Secretaría de Niñez como el Servicio Penitenciario Bonaerense cuentan con recursos suficientes para garantizar el acercamiento familiar y con la comunidad, a la vez que los programas de reinserción social garantizan la regeneración de los lazos perdidos con la comunidad.-

Solicita, en consecuencia, se haga lugar al recurso de Casación y se revoque la resolución atacada.-

V.- Disiento llanamente con lo afirmado por el recurrente y entiendo que lo decidido por el “*a quo*” resulta ajustado a derecho.-

En efecto, **H., B. L.** se encuentra condenado al cumplimiento de una pena privativa de libertad en razón de un delito que cometió cuando era menor de 18 años de edad. El reclamo giraría entonces en torno a dos cuestiones: a) la inconveniencia de que el mismo permanezca una vez cumplidos los 18 años de edad privado de su libertad en un establecimiento dependiente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, en contacto con jóvenes de edad menor; b) el perjuicio de incluir al **H., B. L.** en el Programa Jóvenes Adultos, realojándolo, en consecuencia, en una Unidad Penitenciaria lejana a su domicilio, circunstancia que lo privarían de la contención familiar y social.-

Entiendo que la respuesta debe ser integral y debe encontrarse teniendo como directriz la garantía del interés superior del niño, respetándose los patrones legales mínimos nacionales e internacionales, con el objeto de preservar la integridad y garantizar condiciones de detención que contemplen su especial situación de vulnerabilidad.-

En tal sentido, resulta necesario revisar las pautas normativas internacionales de derechos humanos que deben ser

observadas, propiciando una interpretación armónica con lo dispuesto por el régimen relativo al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.-

Es oportuno señalar que, con la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a nuestro bloque de constitucionalidad, se ha conformado una dimensión supranacional de derecho, por lo que el control de constitucionalidad ha evolucionado a un control de convencionalidad, que incluye el examen de las normas de orden superior incorporadas por el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.-

Así, como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación “...*todos los órganos del Estado deben asumir los roles de garante (art. 1.1 Convención Americana), que a cada uno, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales les corresponde....Los tribunales están obligados a atender como consideración primordial al interés superior del niño, sobretodo cuando es doctrina de esta Corte que “garantizar” implica el deber de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención...*” (Fallos 318; 514).

Aduno a ello, el principio de buena fe emergente del art. 31.1 de la Convención de Viena que conlleva a que los pronunciamientos de los órganos supranacionales sean también obligatorios respecto de los Estados, en el sentido de llevar a cabo sus mayores esfuerzos para aplicarlos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, interpretación ésta que efectuara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “*Loayza Tamayo vs. Perú*” (17-09-1997).-

En tal lineamiento, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 prevé, en lo pertinente, que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos, al igual que los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), Reglas para la Protección de Menores Privados de la Libertad (Reglas de La Habana) y las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), conjuntamente con las decisiones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, como la Observación General N° 10 sobre los derechos del niño en la justicia de menores, entre otras, conformando todo el marco jurídico de protección de los Derechos Humanos de los Niños.-

Considero, en consecuencia, que cualquier interpretación que al respecto se adopte fuera del marco sistemático en el que la misma se encuentre y sustentada sólo en una alternativa posible del texto legal, dejaría la decisión librada a la arbitrariedad.-

Entonces, como criterio básico que debe ser observado por los sistemas de justicia juvenil, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3.1 dispone que *“...En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño..”*, el que según la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –Ley 26.061- debe entenderse como la *“...máxima satisfacción, integral y simultánea de los*

derechos y garantías reconocidos en esta ley...” (artículo 3), efectuando seguidamente una enumeración de criterios que deben respetarse, entre los que se señala “...c) *El respeto al pleno desarrollo de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;* d) *Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;* e) *El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común...*” especificando como corolario que “...cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros...”. Por su parte, el artículo 19 de su Decreto Reglamentario 415/2006 dispone que “...La privación de la libertad personal adoptada de conformidad con la legislación vigente, no podrá implicar la vulneración de los demás derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes...”.-

Se ha expedido al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recordar la Observación General N° 13 de las Naciones Unidas que señala que “...los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se conceden a los adultos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...”, agregando que “...los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párr. 54). Que estos derechos especiales que tienen los menores por su condición, no constituyen sólo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica. Así, en lo que aquí interesa, la Convención del Niño establece los principios fundamentales para el sistema penal de menores en los artículos 37 y 40 de



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

la Convención. El Comité de los Derechos del Niño, intérprete de dicha Convención, ha recomendado a los Estados Parte asegurar “la total implementación en la justicia penal juvenil a los estándares de la Convención Internacional del Niño en particular a los arts. 37, 39 y 40 de la Convención, como a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) y a la Guía de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Reglas de RIAD)...” (C.S.J.N., M 1022.XXXIX, 07-12-2005).-

Como se advierte, el régimen de la justicia penal juvenil tiene como guía la necesidad de garantizarle a los niños y adolescentes una protección especial en razón de su edad, que brinde a los jóvenes en conflicto con la ley penal las condiciones más adecuadas para su tratamiento multidisciplinario socio educativo y familiar, ello en función de la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40.1 C.D.N.).-

En cuanto a la inconveniencia de alojar a los jóvenes en centros alejados de su núcleo familiar debe considerarse, además de la normativa citada precedentemente, lo estipulado por la Ley 13.298 que en su art. 3 dispone “...la política respecto de todos los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes, y programas de prevención, asistencia y reinserción social...” entendiendo como interés superior del niño “...la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos...” debiendo apreciarse en cada situación concreta “...c) la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y sus deberes...”. Por su parte el Decreto 300/05, reglamentario de la ley citada expresa que “...Los Ministerios y Secretarías que integran la comisión del art. 23 de la Ley 13.298, deberán contemplar, además, el acceso prioritario a los programas

vigente a quienes se encuentran en la franja etárea de los 18 a 20 años inclusive, debiendo además implementar en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones, y programas que les posibiliten el pleno ejercicio de sus derechos..” (art.- 2), estableciéndose en el art. 6 de la citada normativa que “Las acciones u omisiones por parte del Estado, a través de sus instituciones así como por parte de la familia y de la comunidad, que interfieran, obstaculicen el disfrute o ejercicio de uno o más derechos, o el acceso a una igualdad de oportunidades para que niñas, niños y adolescentes logren su desarrollo integral y pleno, serán entendidas como amenazas a sus derechos. Las acciones u omisiones provenientes del Estado, a través de sus instituciones así como parte de la familia y de la comunidad que nieguen, impidan el disfrute o ejercicio de algún derecho a niñas, niños y adolescentes, pudiendo a la vez, implicar una amenaza a otros derechos, serán entendidas como violación o vulneración a sus derechos...”. Finalmente La Ley 13.634 dispone en su artículo 6 que “...El niño al que se atribuya haber infringido leyes penales o se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, debe ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño, la importancia de promover su reintegración y que asuma una función constructiva en la sociedad...”, disponiendo en su artículo 33 que “...Son principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal: la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la **reintegración en su familia** y en la comunidad...” (el resaltado me pertenece).-

Ahora bien, con el objeto de precisar quienes se encuentran comprendidos en el goce de las garantías reseñadas, resulta determinante establecer que se entiende por niño o menor.-



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Según expresa la C.D.N. –1989- art. 1 “...se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad...” estableciendo en su art. 37 que “...la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley...”.-

Por su parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (1985) dispone específicamente en su art. 2 que “...Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto...” y “...Menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito...”.-

Concluyo entonces, de acuerdo con una interpretación armónica con los criterios internacionales de derechos humanos que deben ser observados, que aún cumpliendo los dieciocho años de edad siguen manteniendo la categoría de menores delincuentes para la justicia penal juvenil, aquellos jóvenes que habiendo cometido un delito antes de los 18 años de edad, pueden ser castigados, o han sido castigados por un delito en forma diferente a un adulto.-

Tal conclusión conduce, a su vez, a establecer que, siendo la Autoridad de Aplicación de la Ley 13.634 la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires (conf. Art. 69 Ley 13.634, inc. 2 y 9 del Anexo 4 del Decreto 11/11 del Poder Ejecutivo), circunstancia que por otra parte es expresamente reconocida por el impugnante en su reclamo, es ella la autoridad responsable de garantizar que la ejecución de las sanciones impuestas a los jóvenes en procesos iniciados bajo el régimen de la Ley 13.634 es decir, por delitos cometidos cuando los mismos contaban al momento del hecho con menos de 18 años de edad -tal el caso

de **H., B. L.**- se cumplan observando minuciosamente las disposiciones aplicables en materia penal juvenil, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y la restante normativa citada.-

Lo expuesto no resulta ser un cuestión menor, pues si se atiende a lo dispuesto por la Ley 24.660 que prevé, en su artículo 197, para el cumplimiento de la pena que *“...los jóvenes adultos de dieciocho a veintiún años deberán ser alojados en instituciones especiales o en secciones separadas o independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y **en el mantenimiento de los vínculos familiares...**”* (el resaltado me pertenece) y lo determinado por la Ley 12.256 que en su artículo 15 establece que *“...Los jóvenes adultos (de 18 a 21 años) serán alojados en establecimientos o secciones especiales con el objeto de facilitar el desarrollo de aquellos programas jóvenes asistenciales y/o de tratamiento que, implementados para pequeños grupos, contemplen con especial énfasis los aspectos formativo educativos de los mismos, teniendo en cuenta la especificidad de los requerimientos propios de la edad...”*, la circunstancia de no haberse creado en las Unidades Penitenciarias próximas al domicilio del joven **H., B. L.** espacios especialmente destinados para su alojamiento, tal y como así lo dispone la normativa vigente en razón de que el Poder Ejecutivo, al decir del recurrente, *“...ha destinado a otros fines...”*, no puede en modo alguno redundar en un perjuicio para el joven implicado, pues, como surge indudable de la legislación citada, el vínculo del niño con su familia no sólo es un derecho del que goza sino que es un deber del Estado la garantía de su observancia.-

En consecuencia, resulta ineludible señalar que la Secretaría de Niñez y Adolescencia no puede desvincularse, en el sentido pleno de la palabra, de las sanciones dispuestas a los jóvenes en el marco



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, las que, por imperio de la ley 22.278 están destinadas precisamente a tener lugar una vez que el joven alcanza la mayoría de edad. Pero dado que la infracción se cometió cuando aún no tenía 18 años de edad, el cumplimiento de las mismas debe respetar los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así fue establecido por la Observación General N° 10/2007 del Comité de Derechos del Niño (CRC/C/GC/10) que le dedica dos párrafos a la cuestión. En el primero de ellos expresó que *“Los niños que tengan la EMRP en el momento de la comisión de un delito (o infracción a la legislación penal) pero tengan menos de 18 años (véanse también los párrafos 35 a 38 infra), podrán ser objeto de una acusación formal y sometidos a un procedimiento penal. Sin embargo, estos procedimientos, **incluido el resultado final**, deben estar plenamente en armonía con los principios y disposiciones de la Convención, según se expresa en al presente observación general..”* (el resaltado me pertenece). Posteriormente se advierte que *“El Comité desea recordar a los Estados Partes que han reconocido el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de acuerdo con las disposiciones del artículo 40 de la Convención. Esto significa que toda persona **menor de 18 años en el momento de la presunta comisión de un delito debe recibir un trato conforme a las normas de la justicia de menores...**”* (el resaltado me pertenece).- Es decir que la mera circunstancia del cumplimiento de los 18 años de edad no excluye al joven que vulneró las leyes penales cuando aún no tenía esa edad, del Régimen relativo al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.-

Lo expuesto se compadece con el artículo 30 de la Ley 13.634 que determina *“Será competente en materia de ejecución penal el órgano judicial que haya impuesto la medida. Este deberá ejercer el permanente control de la etapa de ejecución..”* y el art. 52 sexies de la Ley

Orgánica del Poder Judicial que establece que “...Los Jueces de la Responsabilidad Penal Juvenil ejercerán su competencia en el Juzgamiento de los delitos cometidos por menores punibles y en la respectiva Ejecución Penal...”, Es que un tema es el lugar apropiado para cumplir una sanción impuesta por un tribunal y otra diferente, la autoridad que debe velar por su cumplimiento, ya que del mismo modo en que se ha previsto un procedimiento especial para el menor infractor de la ley penal con órganos jurisdiccionales especializados en cuestiones inherentes a la problemática minoril, de igual manera debe continuar el contralor del cumplimiento de la condena, es decir, al abrigo de un magistrado especializado tanto en las dificultades especiales del condenado –lo fue por un delito cometido siendo menor de edad- como de las vicisitudes de quien sufre un encierro carcelario, sin mengua de sus derechos y garantías.

De lo expuesto, resulta obvio concluir que si se determina que la ejecución penal es competencia del Fuero especializado, ello sólo puede tener sentido en la medida que la normativa aplicable a niñas, niños y adolescentes contemple también a quienes cumplen sanciones impuestas en el marco de la Ley 13.634, aún, claro está, cuando posteriormente alcancen la mayoría de edad.-

La circunstancia de que el lugar de alojamiento de un joven sea en la esfera del Servicio Penitenciario Bonaerense, tal y como así propicia el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, no exime a la Secretaría de Niñez de su obligación de garantizar que el régimen de cumplimiento de la sanción responda a la normativa específica del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Al respecto, cabe señalar la experiencia del Centro Cerrado Virrey del Pino, dependiente de la Secretaría d Niñez y Adolescencia, que recibe exclusivamente a jóvenes de más de 18 años de edad, en cumplimiento de sentencias dictadas bajo el régimen legal de la



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Ley 13.634, aspecto que denota en los hechos un reconocimiento de esa Secretaría en torno a su competencia y responsabilidad en el abordaje de esos jóvenes.

Siendo ello así, nada impide que la Secretaría de Niñez y Adolescencia asuma sus responsabilidades respecto de los jóvenes en trato; obligaciones que incluyen, en general lo dispuesto y que ya he citado, por el artículo 40 de la C.D.N. en el sentido de la importancia de *“...promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad.* Con tal norte, resulta esencial tanto la proximidad del lugar de alojamiento del joven con su domicilio –fundamental para promover su reinserción social y garantizar su contención y vínculo familiar-, como asimismo, que se encuentre debidamente garantizado su derecho a la salud, a la educación y a las actividades recreativas. En definitiva, todo lugar en que sea alojado un joven, no sólo debe ser cercano a su núcleo familiar de origen, sino que debe contar también con acceso a la educación primaria, secundaria y/o terciaria, según sean sus necesidades y requerimientos, servicios de salud, con especial énfasis en la rehabilitación de adicciones, cursos y talleres de oficios y acceso a recreación, de modo tal que el tiempo de privación de su libertad constituya una efectiva implementación de acciones orientadas a su reinserción social.-

Es en base a los compromisos internacionales citados en el presente dictamen y mandatos constitucionales, que el Estado, a través de sus tres poderes debe aunar esfuerzos a fin de asegurar un adecuado goce de las garantías a los niños, niñas y adolescentes en su tratamiento. Al respecto se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que *“...Quien contrae la obligación de prestar un servicio público, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha*

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que cause su cumplimiento o ejecución irregular..” (C.S.J.N. Fallo 312: 1656; 315: 1892, 1902; 316: 2136; 320:266; 325:1277, entre muchos otros).-

Lo expuesto no constituye una mera expresión de deseos ajena a la esfera jurisdiccional, sino que se trata del cumplimiento de los estándares mínimos de una Convención que ha sido incorporada al texto constitucional, como señalé al inicio del presente y cuya inobservancia hace incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional, tal y como fue recientemente establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en “Mendoza y ot. vs. Argentina”, del 14 de mayo de 2013.

La evidente omisión de creación de Centros especializados de alojamiento según el estadio procesal y la edad de los jóvenes del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en cada Departamento Judicial, no puede en modo alguno constituirse en excusa por parte del Poder Ejecutivo Provincial para incumplir obligaciones y promover el alojamiento de un joven en un dispositivo que escapa a la normativa aplicable a su concreta situación y que resulta ajeno a la esfera de la Autoridad de Aplicación por él mismo establecida.-

Por otra parte, entiendo que la simple mención por parte del recurrente en cuanto expresa que el realojamiento del joven **H., B. L.** en una Unidad Carcelaria alejada de su domicilio no vulnera en absoluto su derecho de acercamiento familiar y social, privándolo de contención, en razón de que tanto la Secretaría de Niñez como el Servicio Penitenciario Bonaerense cuentan con recursos suficientes para garantizar el acercamiento familiar, resulta cuanto menos inconsistente y carece de virtualidad sino se encuentra acompañada de un plan estratégico articulado con el Servicio Local que asegure eficazmente que no van a perjudicarse



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

los vínculos indispensables del joven con aquellos que son su núcleo afectivo y que resultan fundamentales a los fines de la reinserción social del joven en cuestión.-

VI.- En consecuencia, cabe advertir entonces que asiste razón al juez de grado, resultando ajustada a derecho su decisión en cuanto expresa que no media en un ámbito cercano al domicilio de **H., B. L.** un dispositivo dependiente de la Secretaria de Niñez y Adolescencia que garantice el efectivo cumplimiento de los estándares mínimos que surgen de la normativa internacional y nacional aplicable. En esas condiciones, no advierto alternativa más adecuada que la permanencia del mismo en el lugar de alojamiento en el que se encuentra actualmente hasta tanto la Secretaria de la Niñez acredite la inclusión en alguna de las unidades cercanas al domicilio del joven un área para jóvenes adultos que respete y cumpla los estándares aquí trazados, resultando su exclusiva responsabilidad, en razón de la omisión de creación oportuna de dispositivos específicos, implementar las acciones que resulten necesarias e indispensables a los fines de evitar que ese alojamiento devenga perjudicial para los restantes jóvenes detenidos en el mismo lugar, lo que así solicito sea resuelto por V.E..-

***Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.-***